

**SENTENCIA
REVISIÓN JUDICIAL N° 19163-2019
LIMA ESTE**

Lima, treinta de setiembre
de dos mil diecinueve

VISTOS, el principal y el expediente administrativo.

I. Materia de apelación:

Es objeto de pronunciamiento ante esta Sala Suprema, los recursos de apelación interpuestos por la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), de fechas nueve de noviembre de dos mil dieciocho y siete de febrero de dos mil diecinueve, obrantes a fojas setenta y cinco y ciento uno del expediente principal respectivamente, contra:

- i) El decreto contenido en la resolución número cuatro, de fecha once de octubre de dos mil dieciocho, obrante a fojas sesenta y siete, que proveyó el escrito presentado por la entidad recurrente con fecha nueve de octubre del citado año, sobre la autorización del levantamiento de la suspensión del procedimiento coactivo.
- ii) La sentencia contenida en la resolución número seis, de fecha veintiocho de diciembre de dos mil dieciocho, obrante a fojas ochenta y seis, que declaró fundada la demanda de revisión judicial y dispuso que en el procedimiento de ejecución coactiva contenido en el Expediente N° 19 09-2013 se haga cumplimiento del requerimiento previo de informar las cuentas destinadas o específicas para el pago de sentencias judiciales o de similar naturaleza; y, que el ejecutor coactivo retrotraiga el embargo expedido, a fin de no afectar los derechos de la entidad edil demandante, con lo demás que contiene.

II. Antecedentes:

2.1. En el caso de autos, la **Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho interpuso demanda de revisión judicial** con fecha veinte de abril de dos mil dieciocho, obrante a fojas veinte y ampliada a treinta y uno del expediente principal, contra la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), el ejecutor y auxiliar coactivo, solicitando se declare nulo e insubsistente los actuados contenidos en el Expediente Coactivo N° 0454-2015-SUNAFIL/ILM-EC01 y que se ordene el

**SENTENCIA
REVISIÓN JUDICIAL N°19163-2019
LIMA ESTE**

levantamiento de la medida cautelar, así como, se determine la responsabilidad civil y administrativa de los codemandados.

Como principales fundamentos, la entidad demandante señala que a través de la Resolución Coactiva N° 23 se ordenó trabar embargo sobre sus cuentas bancarias, hasta por la suma de S/ 134,289.52 (ciento treinta y cuatro mil doscientos ochenta y nueve con 52/100 soles), sin que se haya notificado la resolución que impone la multa a la Gerencia de Administración y Finanzas de su institución, tampoco se cumplió con lo preceptuado en el numeral 70.5 del artículo 70 de la Ley N° 28411, a efecto de atender el pliego presupuestario en el cual se asumirá la deuda.

Añade que, no se efectuó el requerimiento de solicitar la información del número de cuenta de las sentencias judiciales y depósitos, conforme lo dispuesto en el numeral 70.2 del artículo 70 de la Ley N° 28411; y, se incumplió con determinar si las cuentas bancarias embargadas son de dominio privado, en rigor con lo señalado en las Sentencias del Tribunal Constitucional N°s 015-2011-AI/TC, 016-2001-AI/TC y 004-2002-AI/TC.

2.2. El Colegiado de la Sala Civil Descentralizada y Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima Este emitió las siguientes resoluciones:

- i) El decreto de fecha once de octubre de dos mil dieciocho que proveyó el escrito presentado por la recurrente con fecha nueve de octubre de dicho año, señalando que debe tenerse en cuenta lo decidido en el auto de saneamiento procesal y fijación de puntos controvertidos, contenido en la resolución número tres.
- ii) La sentencia de fecha veintiocho de diciembre de dos mil dieciocho, que declaró **fundada la demanda de revisión judicial**, bajo el sustento que la parte demandada no requirió de manera previa a la disposición del embargo, que la municipalidad actora señale la existencia de la cuenta corriente originada para los pagos de sentencias judiciales o estas clases de obligaciones, pues establecieron que agotado este requerimiento recién se procedería a trabar embargo sobre los bienes de la obligada,

**SENTENCIA
REVISIÓN JUDICIAL N°19163-2019
LIMA ESTE**

conforme lo establecido en las Sentencias del Tribunal Constitucional N°s 015-2011-AI/TC, 016-2001-AI/TC y 004-2002-AI/TC.

2.3. Posteriormente, se advierte que la codemandada Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral las decisiones de la Sala Superior y sostuvo que:

a) En relación al decreto apelado: Se vulneró su derecho a la debida motivación, pues no se ha considerado que hasta la fecha de la presentación de su solicitud de autorización del levantamiento de la suspensión del procedimiento coactivo ya han pasado más de los sesenta (60) días hábiles, sin que la Sala de mérito emita resolución definitiva; y, que es una interpretación errónea señalar que basta con la emisión del auto de saneamiento para continuar la suspensión.

b) Respecto a la sentencia impugnada: La primera instancia transgredió su derecho al debido proceso, al no valorar adecuadamente los medios probatorios ni motivar debidamente la presunta arbitrariedad incurrida en relación a la medida cautelar de embargo, dado que desde la notificación del procedimiento de ejecución coactiva (once de setiembre de dos mil quince), hasta la fecha en que se hizo efectivo el apercibimiento (veinte de marzo de dos mil dieciocho), transcurrieron dos años, seis meses y nueve días en que no se cumplió con pagar ni la cuarta parte de la multa adeudada, lo que denota una conducta dilatoria por parte de la accionante.

Añade que tampoco se ha considerado que resulta imposible que el ejecutor coactivo demuestre de manera certera e incuestionable el carácter de intangibilidad de los fondos de la obligada, más aún si la parte actora no adjuntó documento idóneo que acredite la calidad de bien de dominio público de la cuenta embargada.

III. Normativa aplicable:

3.1. En el proceso de revisión judicial, la Corte Suprema al actuar en sede de instancia, lo hace de conformidad con lo establecido en los numerales 23.5 y 23.8 del artículo 23 del Texto Único Ordenado de la Ley N°26979, aprobado

**SENTENCIA
REVISIÓN JUDICIAL N°19163-2019
LIMA ESTE**

por el Decreto Supremo N°018-2008-JUS (en adelante la Ley), teniendo por finalidad examinar, únicamente, si el procedimiento de ejecución coactiva ha sido iniciado o tramitado conforme a las disposiciones previstas en la Ley.

- 3.2.** En tal contexto, debe precisarse que el numeral 9.1 del artículo 9 de la Ley, considera obligación exigible coactivamente a la establecida mediante acto administrativo emitido conforme a Ley, debidamente notificado y que no haya sido objeto de recurso impugnatorio alguno en la vía administrativa dentro de los plazos de Ley o en el que hubiere recaído resolución firme confirmando la obligación.
- 3.3.** Por su parte, el numeral 14.1 del artículo 14 de la citada norma establece que el procedimiento de ejecución coactiva se inicia con la notificación al obligado de la resolución de ejecución coactiva, la que contiene un mandato de cumplimiento de una obligación exigible en los términos antes indicados. Además, el numeral 14.2 del acotado artículo establece que solo se podrá iniciar el procedimiento de ejecución coactiva cuando haya sido debidamente notificado el acto administrativo que sirve de título de ejecución. y siempre que no se encuentre pendiente de vencimiento el plazo para la interposición del recurso administrativo correspondiente.
- 3.4.** Aunado a ello, debemos indicar que el numeral 17.1 del artículo 17 dispone que vencido el plazo de siete días hábiles a que se refiere el artículo 14 sin que el obligado haya cumplido con el mandato contenido en la resolución de ejecución coactiva, el ejecutor podrá disponer se trabaje cualquiera de las medidas cautelares establecidas en el artículo 33 de la Ley. En ese sentido, el acotado artículo 33 prevé en su literal d) que una de las modalidades de embargo que puede trabar el ejecutor es el embargo en forma de retención, el cual recae sobre los bienes, valores y fondos en cuentas corrientes, depósitos, custodia y otros, así como sobre los derechos de crédito de los cuales el obligado sea titular, que se encuentren en poder de terceros.
- 3.5.** De otro lado, el artículo 12 del Reglamento de la Ley N° 26979, aprobado por el Decreto Supremo N°069-2003-EF, prescribe que las notificaciones de los actos a los que se refiere el artículo invocado, se realizarán de

**SENTENCIA
REVISIÓN JUDICIAL N° 19163-2019
LIMA ESTE**

conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

En ese sentido, remitiéndonos a este último cuerpo normativo mencionado, en lo que concierne a las disposiciones de notificación personal que resultan relevantes para el caso, tenemos que el numeral 20.1.1 del artículo 20 señala que la notificación personal al administrado se efectuará en su domicilio; y, el numeral 21.3 del artículo 21 dispone que: “En el acto de notificación personal debe entregarse copia del acto notificado y señalar la fecha y hora en que es efectuada, recabando el nombre y firma de la persona con quien se entienda la diligencia. Si ésta se niega a firmar o recibir copia del acto notificado, se hará constar así en el acta, teniéndose por bien notificado. En este caso la notificación dejará constancia de las características del lugar donde se ha notificado”.

- 3.6.** Asimismo, la Primera Disposición Final del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584 establece que el Código Procesal Civil es de aplicación supletoria en los casos no previstos en la citada Ley; por ello, corresponde señalar que conforme el artículo 121 del referido Código se establece que a través de los decretos se impulsa el desarrollo del proceso, disponiendo actos procesales de simple trámite.

IV. Absolución del recurso de apelación contra el decreto de fecha once de octubre de dos mil dieciocho:

- 4.1.** Previamente es importante señalar que el numeral 1 del artículo 35 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584 dispone que en el proceso contencioso procede el recurso de reposición contra los decretos a fin de que el Juzgador los revoque; dispositivo legal concordado con lo regulado en los artículos 362 y 363 del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria al caso.
- 4.2.** En autos se advierte que, con fecha nueve de noviembre de dos mil dieciocho, la recurrente interpuso recurso de apelación contra el decreto contenido en la resolución número cuatro, conforme se aprecia a fojas setenta y cinco del expediente principal, a pesar que contra la resolución

**SENTENCIA
REVISIÓN JUDICIAL N° 19163-2019
LIMA ESTE**

cuestionada correspondía a la entidad demandada presentar un recurso de reposición, en rigor con lo preceptuado en el numeral 1 del artículo del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, así como, en el artículo 362 del Código Procesal Civil, los cuales establecen que solo procede respecto a este tipo de resolución el medio impugnatorio de reposición, de acuerdo al trámite ha sido previsto en el artículo 363¹ del citado Código.

4.3. Asimismo, se debe considerar que el Código Procesal Civil regula los requisitos de procedencia de los medios impugnatorios, señalando en su artículo 358 que: “El impugnante fundamentará su pedido en el acto procesal en que lo interpone, precisando el agravio y el vicio o error que lo motiva. El impugnante debe adecuar el medio que utiliza al acto procesal que impugna”; y, en su artículo 359 que: “El incumplimiento de alguno de los requisitos determina la declaración de inadmisibilidad o de improcedencia del medio impugnatorio, mediante resolución debidamente fundamentada”.

4.4. En ese orden de ideas, y siendo la resolución recurrida solo impugnabile con el recurso de reposición, se constata que la Sala Superior no verificó en el auto de concesorio que en este caso no correspondía la interposición de un recurso de apelación, en consecuencia, corresponde en rigor al artículo 367 del citado cuerpo normativo², declarar nulo el concesorio de la apelación interpuesta por la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) contra el decreto de fecha once de octubre de dos mil dieciocho, dispuesto en el auto contenido en la resolución número ocho, de fecha veinte de noviembre de dos mil dieciocho, obrante a fojas setenta y nueve del expediente principal; y, procediendo a calificarla, declárase improcedente este medio impugnatorio.

V. Análisis del caso:

¹ Artículo que establece: “El plazo para interponerlo es de tres días, contado desde la notificación de la resolución. Si interpuesto el recurso el Juez advierte que el vicio o error es evidente o que el recurso es notoriamente inadmisibile o improcedente, lo declarará así sin necesidad de trámite. De considerarlo necesario, el Juez conferirá traslado por tres días. Vencido el plazo, resolverá con su contestación o sin ella [...]”.

² Dispositivo legal que establece: “[...] El superior también puede declarar inadmisibile o improcedente la apelación, si advierte que no se han cumplido los requisitos para su concesión. En este caso, además, declarará nulo el concesorio”.

**SENTENCIA
REVISIÓN JUDICIAL N° 19163-2019
LIMA ESTE**

Con el marco jurídico descrito, esta Sala Suprema procede a realizar el examen de legalidad de los procedimientos de ejecución coactiva materia de revisión.

5.1. En el **Expediente Coactivo N° 0454-2015-SUNAFIL/ILM-EC01** se advierte que este procedimiento administrativo fue iniciado por la ejecutora coactiva de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), a fin de ejecutar el cobro de la multa contenida en la Resolución de Sub Intendencia N° 699-2014-SUNAFIL/ILM/SIRE1, por haber incurrido la actora en infracciones sobre relaciones laborales y contra la labor inspectiva. Esta resolución fue notificada en primera visita con fecha nueve de enero de dos mil quince, en el domicilio legal y fiscal de la parte accionante situado en el jirón Los Amatas N° 180, urbanización Zarate del distrito de San Juan de Lurigancho y recibida a través del sello de recepción del Área de Trámite Documentario y Archivo de la demandante, conforme se aprecia en la Cédula de Notificación N° 0023-2015-SUNAFIL/ILM/SIR 1 obrante a fojas veintinueve del expediente acompañado.

5.2. Asimismo, se verifica que a través de la Cédula de Notificación N° 195-2016-SUNAFIL/IL, obrante a fojas cuarenta y uno, se diligenció a la accionante la Resolución de Intendencia N° 011-2015-SUNAFIL/ILM, que declaró infundado su recurso de apelación interpuesto contra la citada resolución de sub intendencia y se confirmó la sanción impuesta; dicha cédula fue notificada en primera visita y recepcionada a través del sello del Área de Trámite Documentario y Archivo de la parte actora. En ese sentido, se corrobora que el título de ejecución ha sido debidamente notificado a la entidad accionante, conforme lo dispuesto en el numeral 20.1.1 del artículo 20 y en el numeral 21.3 del artículo 21 de la Ley N° 27444³, cumpliéndose de este modo lo preceptuado en el numeral 9.1 del artículo 9 y en el numeral 14.2 del artículo 14 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 26979.

5.3. Posteriormente, al haber quedado consentida la obligación coactiva, se observa que la parte demandada mediante la Resolución de Ejecución Coactiva N° 01 inició el presente procedimiento coactivo y requirió a la

³ Es importante señalar que la aplicación de este artículo se configura en el presente caso de conformidad con el artículo 12 del Reglamento de la Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva, Decreto Supremo N° 069-2003-EF.

**SENTENCIA
REVISIÓN JUDICIAL N°19163-2019
LIMA ESTE**

demandante que en el plazo de siete (07) días de notificada cumpla con pagar la multa impuesta. Esta resolución coactiva fue notificada en primera visita al citado domicilio y recepcionado por medio del sello del Área de Trámite Documentario y Archivo de la actora, conforme obra a fojas cincuenta y seis del expediente administrativo; verificándose de esta manera lo regulado en el numeral 21.3 del artículo 21 de la Ley N° 27444 y en el numeral 14.1 del artículo 14 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 26979.

5.4. Por ello, después de los diversos requerimientos de pago, se advierte que a través de la Resolución Coactiva N° 23, de fecha veinte de marzo de dos mil dieciocho, obrante a fojas doscientos veinticinco del expediente acompañado, se dispuso trabar medida cautelar de embargo en forma de retención contra la entidad demandante, hasta por la suma de S/ 134, 289.52 (ciento treinta y cuatro mil doscientos ochenta y nueve con 52/100 soles) sobre todos y cada uno de los derechos de créditos actuales y futuros, custodias, depósitos, fondos, valores, acciones, acreencias sin excepción de ninguna clase y otros análogos, señalando la recurrente -de manera genérica- que estos valores deben ser susceptibles de embargo de acuerdo al ordenamiento jurídico y legal vigente.

5.5. Asimismo, se constata que por medio de la Resolución Coactiva N° 25, de fecha tres de abril de dos mil dieciocho, obrante a fojas doscientos treinta y nueve, se requirió al Banco de Crédito del Perú la entrega de los fondos retenidos de la entidad demandante, lo cual se hizo efectivo mediante el Acta de Entrega de Cheque de fecha seis de abril de dicho año, obrante a fojas doscientos cuarenta y cuatro; y, que a través de la Resolución Coactiva N° 26, de fecha seis de abril de dos mil dieciocho, obrante a fojas doscientos cincuenta, se requirió a la municipalidad actora que cumpla con cancelar el saldo pendiente de la deuda ascendiente a S/ 55, 303.70 (cincuenta y cinco mil trescientos tres con 70/100 soles), monto que deberá ser actualizado a la fecha de pago.

5.6. Al respecto, se debe considerar que el artículo 9 del Reglamento de la Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva, modificado por el artículo 1 del Decreto Supremo N° 201-2011-EF (publicado el diez de noviembre de dos

**SENTENCIA
REVISIÓN JUDICIAL N°19163-2019
LIMA ESTE**

mil once), establece que cuando el procedimiento de ejecución coactiva es seguido contra una entidad del Estado –como en el este caso–, a fin de reanudarse el mismo el órgano jurisdiccional deberá expedir resolución judicial debidamente motivada que la autorice y se considerará en lo que sea aplicable los parámetros establecidos por las sentencias del Tribunal Constitucional N°s 015-2001-AI-TC, 016-2001-AI-TC y 004-2002-AI-TC⁴; en ese sentido, teniendo presente la calidad cosa juzgada de las citadas sentencias y en rigor al artículo 82 del Código Procesal Constitucional⁵, se colige que la aplicación de ese criterio no solo está orientada para los procesos de revisión judicial sobre la reanudación de los procedimientos de ejecución coactiva contra instituciones públicas, sino también su aplicación debe ser observada en todo proceso de revisión judicial durante el análisis del trámite de los procedimientos coactivos en que se hayan trabado embargos sobre bienes o fondos de entidades públicas.

5.7. Cabe precisar, que el Tribunal Constitucional en el Expediente N° 2147-2009-PA/TC, establece que: “[Fundamento 3] resulta constitucionalmente legítimo proceder a la ejecución forzosa contra los bienes del Estado, siempre y cuando estos sean de dominio privado. Sin perjuicio de ello le ha impuesto a la judicatura y a los órganos públicos revestidos de competencias ejecutivas un deber de valoración, motivación y fundamentación al momento de determinar el carácter embargable de un determinado bien del Estado, otorgándole dos parámetros de evaluación: i) si el bien a embargar tiene relación con el cumplimiento de las funciones del órgano público, y ii) si el bien a embargar está afectado a un uso público”. (Subrayado nuestro)

5.8. Del mismo modo, en relación a los depósitos de dinero en las cuentas del Estado, cabe acotar que solo se consideran bienes inembargables a

⁴ El Tribunal Constitucional ha señalado en el fundamento 26 de los Expedientes Acumulados N°s 15-2001-AI, 16-2001-AI y 4-2002-AI, que: “Ante el vacío de la legislación que precise que los bienes estatales pueden ser embargados, el principio general es que al juez le corresponde pronunciar el carácter embargable de un determinado bien, analizando, en cada caso en concreto, si el bien sobre el que se ha trabado la ejecución forzosa está o no relacionado con el cumplimiento de las funciones del órgano público, y si está o no afecto a un uso público”.

⁵ Artículo que dispone que las sentencias del Tribunal Constitucional en los procesos de inconstitucionalidad, como las citadas en el presente caso, que queden firmes tienen autoridad de cosa juzgada; por lo que, vinculan a todos los poderes públicos y producen efectos generales desde el día siguiente a la fecha de su publicación.

**SENTENCIA
REVISIÓN JUDICIAL N° 19163-2019
LIMA ESTE**

aquellos que se encuentren afectos al servicio público⁶; debido que, existen determinadas cuentas del Estado en el Sistema Financiero Nacional, que no solo no tiene la calidad de bien de dominio público, sino que se encuentran específicamente destinadas al cumplimiento de pago de las obligaciones estatales⁷.

5.9. Por ende, se infiere que si bien es cierto de que a la entidad recurrente le asiste el derecho de hacer cumplir las obligaciones de la parte actora, también lo es que este derecho se encuentra limitado por el carácter del bien a afectar; límite que encuentra sustento en el artículo 73 de la Constitución Política del Perú, cuya norma dispone que los bienes de dominio público del Estado son inalienables e imprescriptibles; por lo cual, tienen el carácter de inembargables, no encontrándose revestidos con la misma protección que los bienes de dominio privado, sobre los cuales sí es posible trabar medidas de embargo.

5.10. En ese orden de ideas, teniendo en cuenta que la entidad obligada es un gobierno local, se constata que la ejecutora demandada en la Resolución Coactiva N° 23 no cumplió con determinar si los fondos embargados constituyeron bienes de dominio público o privado de la accionante, pues en la retención ordenada no se estableció de manera específica la respectiva distinción de los bienes materia de embargo; por ello, se corrobora que el presente procedimiento coactivo desde la emisión de la citada resolución coactiva se tramitó contraviniendo los parámetros de evaluación previstos en el fundamento 3 de la sentencia del Expediente N° 2 147-2009-PA/TC del Tribunal Constitucional.

5.11. Sin perjuicio a ello, se advierte que en la parte resolutive de la sentencia apelada se declaró fundada la demanda, pese que la Sala Superior solo amparo el extremo demandado de que en el procedimiento coactivo materia

⁶ Fundamento 32 de los Expedientes Acumulados N°s 15-2001-AI, 16-2001-AI y 4-2002-AI del Tribunal Constitucional: [...] la inconstitucionalidad del artículo 1 del Decreto de Urgencia N° 019-2001 no resi de en lo que omite, sino, por el contrario, en su amplio margen de alcance. Por tal motivo, [...] que en cuanto la disposición referida establece que los depósitos de dinero existentes en las cuentas del estado en el Sistema Financiero Nacional, constituyen bienes inembargables, debe interpretarse que tales depósitos de dinero son sólo aquellos que se encuentren afectos al servicio público”

⁷ Fundamento 7 del Expediente N° 3981-2006-PA/TC del Tribunal Constitucional: “[...] existen determinadas cuentas en el Sistema Financiero Nacional que no solo no tiene la calidad de bien de dominio público, sino que se encuentran específicamente destinadas al cumplimiento de pago de las obligaciones estatales [...]”.

**SENTENCIA
REVISIÓN JUDICIAL N° 19163-2019
LIMA ESTE**

de revisión se incumplió con determinar de manera previa si las cuentas bancarias embargadas son o no de dominio público, en rigor con lo dispuesto en las Sentencias del Tribunal Constitucional N°s 015-2011-AI/TC, 016-2001-AI/TC y 004-2002-AI/TC, conforme se aprecia en los fundamentos 9, 10 y 11 de la resolución recurrida.

5.12. En ese sentido, a fin de resguardar el debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva de las partes procesales, corresponde corregir el fallo de la primera instancia en virtud con lo preceptuado en el artículo 407 del Código Procesal Civil⁸, de aplicación supletoria al caso, y conforme con lo establecido en los fundamentos precedentes, de la siguiente manera: “declarar fundada en parte la demanda de revisión judicial. Dispusieron que en el procedimiento de ejecución coactiva contenido en el Expediente N° 1909-2013 se haga cumplimiento del requerimiento previo de informar las cuentas destinadas o específicas para el pago de sentencias judiciales o de similar naturaleza [...]”.

5.13. Por consiguiente, se debe desestimar en estos extremos los argumentos de apelación de la entidad recurrente, pues sus alegaciones no desvirtúan el incumplimiento de la delimitación previa del carácter inembargable de los bienes afectados por la medida cautelar; y, confirmar la sentencia impugnada que declaró fundada en parte la demanda.

VI. DECISIÓN:

Por tales consideraciones:

i) DECLARARON NULO el concesorio del recurso de apelación interpuesto por la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), de fecha nueve de noviembre de dos mil dieciocho, contra el decreto contenido en la resolución número cuatro, dispuesto en la resolución número ocho, de fecha veinte de noviembre del citado año, obrante a fojas setenta y nueve del

⁸ Artículo que dispone: “Antes que la resolución cause ejecutoria, el Juez puede, de oficio o a pedido de parte y sin trámite alguno, corregir cualquier error material evidente que contenga. Los errores numéricos y ortográficos pueden corregirse incluso durante la ejecución de la resolución. Mediante la corrección las partes también piden al Juez que complete la resolución respecto de puntos controvertidos pero no resueltos. La resolución que desestima la corrección solicitada es inimpugnable”.

**SENTENCIA
REVISIÓN JUDICIAL N° 19163-2019
LIMA ESTE**

expediente principal; y, procediendo a calificarlo, declárase **IMPROCEDENTE** este medio impugnatorio.

ii) CONFIRMARON la sentencia contenida en la resolución número seis, de fecha veintiocho de diciembre de dos mil dieciocho, obrante a fojas ochenta y seis, que declaró **FUNDADA EN PARTE** la demanda de revisión judicial y dispuso que en el procedimiento de ejecución coactiva contenido en el Expediente N° 1909-2013 se haga cumplimiento del requerimiento previo de informar las cuentas destinadas o específicas para el pago de sentencias judiciales o de similar naturaleza; y, que el ejecutor coactivo retrotraiga el embargo expedido, a fin de no afectar los derechos de la entidad edil demandante, con lo demás que contiene.

En los seguidos por la Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho contra la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) y otros, sobre revisión judicial de procedimiento de ejecución coactiva; y, los devolvieron. Interviene como **Juez Supremo ponente: Wong Abad.**

SS.

ARANDA RODRÍGUEZ

VINATEA MEDINA

WONG ABAD

CARTOLIN PASTOR

BERMEJO RÍOS

Lmlc